

INVERSION Y GERENCIA SOCIAL UNA ALTERNATIVA

Desde que se promulgó la primera ley que establece la obligatoriedad de llevar a cabo la Planeación en Colombia (1.950), casi todos los Planes impulsados y ejecutados por los diferentes Gobiernos han definido como prioridad los más variados y diversos Programas de Inversión y Gasto Social. El propósito común y fundamental de dichos Programas, ha sido alcanzar objetivos de redistribución del ingreso nacional para corregir los efectos perversos que genera la competencia entre los diferentes sectores, en la apropiación de los excedentes del proceso económico.

Políticas basadas en el sector de la construcción y en la vivienda como en el gobierno del Presidente Pastrana; Planes de apoyo a los productores del campo, la asistencia a la economía campesina y la inversión en infraestructura social como en los Gobiernos de los Presidentes López y Turbay; políticas de reactivación del empleo y el gasto social como la del Presidente Betancur; discursos sin programas definidos como el de Erradicación de la Pobreza Absoluta de la administración Barco y Planes con metas indirectas de redistribución a través de los mecanismos de Mercado como el de la Administración Gaviria, constituyen las acciones concretas que el País ha llevado a cabo en las últimas décadas para atender los crecientes problemas de pobreza y necesidades sociales de la población.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriormente enunciados, los desequilibrios sociales que ha venido arrastrando el País durante el devenir de su modernización económica, se han ido acumulando hasta el punto de alcanzar los niveles de pobreza alarmante que señalan los últimos estudios del Banco Mundial y que se corroboran en el propio diagnóstico oficial del Presidente Samper, que identifica alrededor de 12 millones de colombianos en condiciones de miseria y excluidos de los beneficios básicos del progreso económico. A su vez algunos estudios realizados por entidades de investigación independientes al Gobierno, han detectado solamente al sur de Santafé de Bogotá casi 2 millones de personas que sobreviven en condiciones de pobreza, de las cuales casi el 30% se encuentran en los límites de la miseria. A lo anterior se suma el deterioro creciente en el ingreso y las posibilidades de gasto de las familias, originado en una situación de inflación que las autoridades económicas no han podido corregir en los últimos 25 años. De otra parte, dichos estudios también demuestran cómo a pesar de los logros alcanzados en materia de cobertura de infraestructura en servicios básicos, la brecha entre el nivel de ingresos rural y urbano ya alcanza el 25%.

En general si se repasan las cifras denominadas como Gasto Social y los indicadores de distribución del ingreso durante las últimas tres décadas, algunas de las preguntas que surgen en forma obligada son: ¿cómo a pesar de las crecientes partidas multimillonarias que han sido asignadas y ejecutadas para los diferentes programas en los Gobiernos de turno, los desequilibrios sociales lejos de disminuir aumentan en volumen y se extienden de manera preocupante por toda la geografía y a todos los sectores de la nación? De la misma forma, ¿cuáles han sido los factores determinantes para tan baja efectividad y escasa eficiencia en los resultados de largo plazo de los Planes y Programas Sociales de todos los Gobiernos, Conservadores y Liberales?

Tal y como el País lo ha experimentado a nivel de los diferentes Programas que se bautizan rimbombantemente y generan enorme expectativa en la población más pobre, la capacidad de la gestión pública de acuerdo con los resultados obtenidos hasta hoy, se ha caracterizado por no alcanzar niveles mínimos de calidad, cumplimiento y continuidad, a pesar de que se comprometen cuantiosos recursos que pertenecen a toda la sociedad y que son estratégicos para la cohesión del Pacto Social.

EDITORIAL

Recogiendo las experiencias de Programas Sociales anteriores, la actual administración del Presidente Samper ha reorientado la concepción indirecta de atención a los desequilibrios sociales de los dos últimos Gobiernos, diseñando una estrategia de atención focalizada hacia las necesidades de los grupos más pobres. Los frentes de inversión social anunciados, son bastante amplios y cubren la seguridad social, la atención a la niñez, salud subsidiada, seguro de desempleo; programas ambiciosos en vivienda, educación, acueductos, alcantarillado y desarrollo urbano. Además del gasto social, se ampliará el fomento a la microempresa y se continúa con el reforzamiento en infraestructura de apoyo a la apertura. Como se puede apreciar, son muchos los frentes y bastante altas las metas de inversión y gasto que abordara el próximo Gobierno.

Sin embargo, para que la estrategia supere perfiles de tipo asistencial basados en elusivos controles de precios y en subsidios directos, es necesario implementar mecanismos definidos para la participación de la comunidad en la creación de puestos de trabajo a nivel de la industria y de una infraestructura social y económica sólida y eficiente que permita en forma permanente la igualdad de oportunidades educativas, laborales y empresariales hacia los grupos más vulnerables de la población. Así mismo, construir un sistema de monitoreo efectivo para los diferentes programas, con el fin de evaluar sus niveles de eficiencia y efectividad para alcanzar las metas propuestas.

Para aquellos que estudiamos la problemática de la sociedad desde el punto de vista de la racionalidad empresarial, con la rigurosidad, los métodos y las técnicas que se imponen en la investigación aplicada al complejo y cambiante mundo de los negocios, no existe justificación alguna para no aplicar los modelos, las técnicas e instrumentos desarrollados por las ciencias administrativas modernas y que se extienden a todos los campos de la Administración pública y privada, con el fin de garantizarle a la sociedad un mínimo nivel de eficiencia en la asignación de los recursos y de efectividad en la gestión administrativa.

Si los recursos y la infraestructura a nivel de las entidades encargadas de ejecutar y gestionar el gasto social, son insuficientes o no están capacitados en una Cultura de la Eficiencia y la Efectividad en Logro, el País cuenta con una alternativa valiosa adonde acudir como son las Universidades: Ellas a través de sus Centros de Asesoría y Capacitación, en muchos de los cuales se han adelantado en forma conjunta Programas exitosos de intercambio a nivel interinstitucional, no solo en el área de Capacitación en la cual se han obtenido logros importantes, sino también en la monitoría, seguimiento y evaluación de Programas y Proyectos especiales, en los cuales se necesita una alta participación de la comunidad de usuarios.

La experiencia amplia, la calidad, capacidad y trayectoria de la Universidad Colombiana, constituyen un recurso idóneo y de singulares características de solvencia moral y ética, para ejercer con el mayor éxito una Gerencia Social con alto nivel de logro, que atienda con efectividad la enorme deuda social que el País ha acumulado durante tantos años.

E.A.N. Santafé de Bogotá, Noviembre de 1.994